



SEMANARIO JUDICIAL.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por Don Martin Careaga, socio gerente de la razon social J. de la Quintana y Compañia establecida en el puerto de Mazatlan, contra la Administracion de Rentas de Guaymas, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El fiscal dice: Que son tan buenas las razones y tan robustos los argumentos que expone el quejoso C. Martin Careaga, basado todo en los varios artículos que cita de la Constitución general y la del Estado, que no puede menos la voz fiscal que apoyar este amparo que solicita el C. Careaga para que se le exima de la contribucion que se le exige por el Administrador de Rentas de esta Ciudad, en virtud del decreto del Estado fecha 22 de Junio próxim opasado, reglamentado por el Ejecutivo del mismo, dos dias despues. Es requisito constitucional é indispensable, la vecindad para ser contribuyente é imponerle la respectiva cuota en el lugar

de su residencia. El C. Careaga ha probado suficientemente que no es vecino de este Estado; que su residencia la tiene en el vecino de Sinaloa; que solo está en este como transeunte y accidentalmente; que todos sus intereses los tiene en Mazatlan en la casa de comercio de J. de la Quintana y Compañia de que es socio; y por lo mismo, al querérsele exigir la cuota que se le ha impuesto, se le viola indudablemente la garantía que le otorga el art. 16 de la Carta fundamental de la República, y tanto por esto como por estar fundada su solicitud en el art. 1º frac. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, pide se resuelva que ha lugar al amparo que se pretende.

Guaymas, Agosto 7 de 1874.—*Lic. José Monteverde.*

Es copia que certifico. Guaymas, Agosto 8 de 1874.—*Lic. J. Monteverde.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guaymas, Agosto 8 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante este Juzgado por Don Martin Careaga, contra el C. Administrador de Rentas de esta Ciudad,

por el cobro que le hace de ciento veintiseis pesos en que fué acuotado para el pago de la contribucion extraordinaria de \$ 15000 que por una sola vez impuso el decreto número 40 del Estado de 22 de Junio próximo pasado; visto el informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado; las pruebas presentadas por el C. Carcaga; el parecer fiscal; la citacion para sentencia y cuanto mas de autos consta, y

Considerando: que la obligacion de los extranjeros de contribuirá los gastos públicos, es naturalmente de la manera que lo dispongan las leyes segun lo expresa el art. 38 de la Constitucion general: que en el caso de que se trata en el presente juicio, la Constitucion del Estado en su art. 35 dice: que son obligaciones de los extranjeros, contribuir para los gastos públicos del Estado y municipio en que residan: que Don Martin Carcaga ha justificado plenamente, que el municipio de su residencia es Mazatlan, del Estado de Sinaloa, donde tiene sus negocios y familia; que aquí no posee intereses ni giro alguno de los que el decreto de 22 de Junio próximo pasado requiere para ser contribuyente; este Juzgado, por los fundamentos expuestos y apoyado en el art. 19 frac. I de la ley de 20 de Junio de 1869, falla:

1º La Justicia de la Nacion ampara y protege á Don Martin Carcaga, contra el cobro que el C. Administrador de Rentas de este puerto le hace de \$ 126 en que fué acuotado para el pago de la contribucion extraordinaria de \$ 15000 que por una sola vez decretó el Congreso del Estado, en 22 de Junio próximo pasado, por violar con dicho cobro en la persona del quejoso, la garantía que le concede el art. 16 de la Constitucion general.

2º Notifíquese, publíquese en el periódico del Estado, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales.

Fernando M^º Astiazaran, Juez de Distrito de Sonora, definitivamente juzgando, así lo decretó, firmando con los testigos de su

asistencia ordinaria.—*Fernando M. Astiazaran.*—Asistencia, *P. del Rincon.*—Asistencia, *P. A. Pina.*

Es copia que certifico. Guaymas, Agosto 8 de 1874.—*F. M. Astiazaran.*—Asistencia.—*P del Rincon.*—Asistencia.—*P. A. Pina.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 5 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por Don Martin Carcaga, socio gerente de la razon social J. de la Quintana y Compañía, establecida en el puerto de Mazatlan, contra la Administracion de Rentas de Guaymas, por el cobro que le hace de \$ 126 como parte de la contribucion extraordinaria impuesta por decreto de la II Legislatura del mismo Estado de Sonora, fecha 22 de Junio último, con cuyo acto reputa vulnerada la garantía á que se refiere el art. 16 de la Constitucion federal; y

Considerando: que el decreto citado solo puede comprender á los habitantes del Estado de Sonora que deban contribuir á los gastos del Estado ó municipio de él, en que residan; que el quejoso, ha probado que no tiene en Sonora ninguna clase de giro mercantil, ni industrial, ni alguno de los demas á que se refiere el decreto citado, y que por lo mismo, cobrarle la contribucion indicada importa vulnerar la garantía de que pide amparo; de conformidad con lo que dispone el art. 101 de la Constitucion general, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio á 8 de Agosto último, por el Juzgado de Distrito de Sonora, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Don Martin Carcaga, contra el cobro que el C. Administrador de Rentas del puerto de Guaymas le hace de \$ 126 en que fué cuotizado para el pago de la contribucion extraordinaria de \$ 15000 que por una sola vez decretó el II. Congre-

so del Estado en 26 de Junio último.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de la sentencia relativa; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CO. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José S. Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Altamirano.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José G. Ramirez.*—*L. M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 30 de 1874.—*E. Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por el C. Lic. Bernardo Ponce Font, como defensor de Ignacio Contreras y Leonido Casanova, contra el C. Pedro Ortega Polanco, que figura como Gefe político de Acanech, y juzga á Contreras y Casanova, por la ley de 3 de Mayo de 1873.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En el escrito que motiva este juicio, el Lic. D. Bernardo Ponce Font, pidió, que V. se sirviera amparar á los reos de homicidio Ignacio Contreras y Leonido Casanova, de quienes es defensor, contra los actos del Gefe político de Acanech que los estaba juzgando conforme á la ley general de salteadores y plagiarios, que ni es constitucional, por haber sido expedida, en sentir del actor, contra el art. 13 del Código fundamental de la República, ni aplicable á sus defendidos, porque en el sentido legal y aun gra-

matical de la palabra, no puede considerárseles culpables del delito de asalto, como lo comprendió el Juez de 1ª instancia del crimen de esta Capital que instruyó y sentenció la causa abierta contra ellos por homicidio.

Resuelto el punto previamente intentado acerca de la suspensión de dicho procedimiento, la presunta autoridad responsable rindió su informe sobre lo principal del recurso, contrayéndose en él á demostrar la procedencia de su jurisdicción, con el argumento de que fué reconocida por el mismo defensor, con el hecho de haber aceptado este encargo que le confirió la propia autoridad informante, y con la razon, que es mas bien una excusa, de que el H. Tribunal Superior de Justicia se declaró incompetente para conocer de la causa respectiva.

En tal estado el juicio, los reos, á cuyo favor lo intentó el Sr. Lic. Ponce, presentaron á V. un segundo ocurso en que reproduciendo los fundamentos en que se apoya aquel como defensor suyo, alegan que el que los juzga no es tal Gefe político, por falta de autoridad del Lic. D. Miguel Castellanos Sanchez que lo nombró para aquel destino, y por el mismo defecto del que, titulándose Tribunal Superior de Justicia del Estado, hizo la declaracion de su incompetencia, que ha dado lugar á que el procedimiento se siga con sugesion á la citada ley de 3 de Mayo.

El Fiscal, despues de haber procurado examinar con el acierto debido, las razones en que se apoyan ambos escritos, ha deducido en conclusion, que el amparo solicitado, si se fundara solamente en las del primero, no debería concederse; porque si bien es cierto que el art. 13 de la Constitucion federal, garantiza, que en la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, cierto tambien es, que el art. 29 del mismo Código político de la Nacion, permite que en los casos de invasion, perturbacion grave de la paz pública, ó cualesquiera otros que pon-